



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA:	PROCESO EJECUTIVO
ASUNTO:	APELACIÓN AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES
EJECUTANTE:	PROTECCIÓN S.A.
EJECUTADO:	ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO ASPROGRESO EN LIQUIDACIÓN
RADICADO:	050013105 006 2013 01742 01
ACTA No	102

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDON y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso ejecutivo promovido por **PROTECCIÓN S.A.** en contra de **ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO - ASPROGRESO EN LIQUIDACIÓN-** para resolver el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante frente al auto por medio del cual se resuelven excepciones.

A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 102** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES DEL AUTO RECURRIDO

El ejecutante solicitó¹ se librará mandamiento ejecutivo en contra de **ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO - ASPROGRESO EN LIQUIDACIÓN-** en relación con los siguientes conceptos: i) Por concepto de capital de la obligación a cargo de empleador por los aportes en Pensión Obligatoria, y que consta en el título ejecutivo que se anexa a la demanda; ii) El valor de los intereses de mora causados y no pagados hasta el 18 de octubre de 2013; iii) El valor de los intereses moratorios causados desde la fecha del Requerimiento por Mora, y hasta que el pago real y

¹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – C01 PRINCIPAL- ARCHIVO 001– PAGINA 1 a 15

efectivo se verifique en su totalidad; iv) Que se condene al ejecutado en costas y agencias en derecho.

ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO ASPROGRESO EN LIQUIDACIÓN se encuentra representado por curadora *ad litem*, quien propuso las excepciones que denominó prescripción de la acción y cobro de lo no debido².

La Juez de instancia dio por probada la excepción de prescripción **frente a la acción de cobro**, acudiendo para ello al artículo 94 del CGP, enrostrando de esa manera a la parte ejecutante su conducta procesal negligente en el sentido de no haber notificado al ejecutado el auto que libró mandamiento de pago dentro del año siguiente a la notificación de este por estados.

Esta decisión fue recurrida por la ejecutante, insistiendo en que lo relevante es la naturaleza imprescriptible de los aportes, señalando que debe tenerse en cuenta que se está buscando la protección de los derechos a la seguridad social y que el ordenamiento jurídico no consagra ninguna norma que indique que los aportes son prescriptibles.

2. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA – PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia la parte ejecutante los presenta solicitando que se revoque la decisión de primera instancia³. Argumenta que es erróneo otorgar efectos extintivos a los aportes pensionales reclamados porque al ser esenciales para el derecho a la pensión no están sujetos a prescripción y al declararla se vulnera el derecho a la seguridad social según el artículo 48 de la Constitución. Insiste que las normas que regulan las cotizaciones al sistema de pensiones no establecen un término de caducidad expreso para las acciones de cobro por incumplimiento del empleador, y considera inapropiado aplicar los términos extintivos por analogía con el estatuto tributario.

3. CONSIDERACIONES

²CARPETA PRIMERA INSTANCIA –C01 PRINCIPAL- ARCHIVO 19 – PÁGINA 1 a 7

³CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 04 - PÁGINA 1 a 2

Pues bien, atendiendo los argumentos de la alzada, se tiene que con miras a determinar la viabilidad de la prescripción declarada, acude esta Sala en primera medida a lo que ha adoctrinado la Sala de Casación Laboral en cuanto a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, encaminado a que *“mientras el derecho se encuentre en formación, esto es, que el afiliado no haya cumplido los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tal derecho no prescribe cuando hay mora en el pago por parte del empleador a las administradoras, por cuanto las cotizaciones son un elemento constitutivo de la pensión, de donde deviene que las administradoras quedan con toda la posibilidad de hacer valer aquellas acciones que la ley les permite y las obliga con el fin de recaudar, en nombre de sus afiliados, las cotizaciones que están en mora por parte del empleador que no las ha cancelado en tiempo”*, posición que ha sido plasmada para cuando el derecho de acción es ejercido por el trabajador, parte débil de la relación jurídica sustancial, quien no puede verse afectado por la conducta patronal omisiva de sus obligaciones (**Ver SL738-2018, SL1732-2022**).

No obstante, el panorama surte una modificación cuando se trata del ejercicio de acción que efectúa la administradora de pensiones, quien, si bien actúa en representación de sus afiliados, tiene a su cargo el deber imperativo de administrar los recursos y velar por su recaudo y cobro de las cotizaciones en mora – **Decreto 656 de 1994 y 1161 de 1994**-, de cuyo cumplimiento se deriva la garantía de las prestaciones que se causen en favor de sus titulares o beneficiarios.

Es por ese propósito, que el **artículo 24 de la Ley 100 de 1993** autoriza el cobro de los aportes a las AFP por contar con las herramientas logísticas y jurídicas para advertir cuando un empleador incurre en mora y determinar el monto de la deuda, así como la constitución del título ejecutivo y elevación de la acción en oportunidad, escenario en el que sí surte efectos la prescripción extintiva de conformidad con el **artículo 54 de la Ley 383 de 1997**, que establece *“las normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobro contenidas en el libro quinto del estatuto tributario nacional, serán aplicables a la administración y control de las contribuciones y aportes inherentes a la nómina, tanto del sector privado como del sector público, establecidas en las leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100 de 1993.”*

Precisamente, la Corte Constitucional en la sentencia **C-711 de 2001** determinó que los aportes a salud y a pensiones **son de naturaleza parafiscal**, por sus características afines a estas contribuciones, que se identifican por ser **obligatorias y por no conferir al ciudadano el derecho a exigir del Estado la prestación de servicios o transferencia de bienes**, comportando entonces una especial afectación, la cual no se destina al tesoro público y **se cobran sólo a un gremio, colectividad o grupo socio-económico**; postura ratificada en sentencia C-155 de 2004.

Sostuvo en esa oportunidad la Corte Constitucional que:

"(...) Poniendo en un extremo los elementos que anuncian la parafiscalidad, y en el otro los aportes para salud y pensiones, se tiene: 1) los mencionados aportes son de observancia obligatoria para empleadores y empleados, teniendo al efecto el Estado poder coercitivo para garantizar su cumplimiento; 2) dichos aportes afectan, en cuanto sujetos pasivos, a empleados y empleadores, que a su turno conforman un específico grupo socio-económico; 3) el monto de los citados aportes se revierte en beneficio exclusivo del sector integrado por empleadores y empleados. Consecuentemente ha de reconocerse que los aportes a salud y pensiones son de naturaleza parafiscal (...)"

En esa misma idea, sobre la naturaleza parafiscal de los aportes a pensión y la posibilidad latente de extinguirse por prescripción, la acción de cobro de la que son titulares las Administradoras de Fondos de Pensiones, ha sido estudiada por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 2 de diciembre de 2010, Rad. 17365, providencia en la cual se consideró:

"(...) Según los artículos 17 y 161 de la Ley 100 de 1993, durante la relación laboral los trabajadores deben efectuar cotizaciones obligatorias al Sistema General de Seguridad Social. Por su alcance y finalidad, tales cotizaciones se han reconocido como contribuciones parafiscales, porque corresponden a tributos que deben pagar los empleadores y los afiliados al sistema, en las proporciones que establece la ley, para que éste cubra las contingencias que afecten la salud y capacidad económica del trabajador, aunque dicha contraprestación no sea equivalente al monto de la cotización. Estos aportes se destinan exclusivamente a financiar el sistema, en virtud de los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad (artículo 49 de la Constitución Política) (...)"

De acuerdo con la Ley 100 de 1993 (artículos 20, 22, 161, 204), el empleador está obligado a efectuar sus aportes y los de sus trabajadores. Si no lo hace, la entidad administradora del sistema puede cobrarlos, a través del procedimiento administrativo de cobro que regula el Estatuto Tributario, según el artículo 54 de la Ley 383 de 1997, en concordancia con el artículo 57 de la Ley 100 de 1993. El artículo 817 del Estatuto Tributario, que hace parte del título VIII - Libro Quinto, aplicable al cobro de los aportes parafiscales, establece el término de prescripción de la acción de cobro. (...)"

Igualmente, la CSJ en sentencia **STL3382-2020**, precisó que las acciones de cobro en cabeza de los fondos pensionales para la consecución de los aportes dejados

de pagar por los empleadores, prescriben en el término de 5 años de conformidad con el artículo 817 del Estatuto Tributario. A la letra, señaló:

“(…) Analizado lo expuesto por el Tribunal censurado, advierte la Sala que le asiste razón a la parte actora en cuanto a los cuestionamientos endilgados al trámite surtido al interior del proceso ejecutivo laboral de la referencia, pues resulta innegable la trasgresión de las prerrogativas superiores de aquella, respecto de la prescripción de la acción ejecutiva de los aportes obligatorios dejados de consignar por el empleador al sistema general de pensiones, como como pasará a exponerse.

Es necesario separar jurídicamente el vínculo entre el empleador y la administradora de fondos de pensiones, y la relación entre esta última y el trabajador, puntualizando, que en el sub examine, nos encontramos frente a la primera circunstancia.

Precisado lo anterior, es pertinente indicar, que el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, establece como una obligación del patrono descontar los aportes del trabajador a la seguridad social del sueldo de cada mes, los cuales, -adicionados a los aportes patronales- deberán trasladarse a la Entidad Administradora de Pensiones. Esto significa entonces, que, durante ese período, la entidad administradora de pensiones debe haber recibido y registrado en su sistema los aportes que mes a mes le debieron trasladar los empleadores, con base en las afiliaciones respectivas y durante la vigencia de su vínculo laboral. Al no ocurrir así, es decir, al presentarse una mora patronal, el Fondo debe proceder a cobrar las cotizaciones pendientes, inclusive, coactivamente.

En esa misma línea, el artículo 24 ibídem preceptúa, que «corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo».

(…)

Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora, así como de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994.

Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer efectivos sus créditos de conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6° de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen.

(…)

Ahora bien, con base en la normatividad referida, es innegable que el propósito del legislador no era el de dejar a discreción de las entidades administradoras de pensiones, el término para ejercer y adelantar la acción ejecutiva, como quiera que, primero, ello iría en contra de la misma eficiencia y cuidado que se exige a las administradoras en el manejo de los aportes pensionales, y, segundo, porque la incuria y negligencia de la administradora pondría en riesgo el sistema de seguridad social en pensiones, y eventualmente la misma pensión del trabajador.

Así las cosas, concluye esta Sala que la entidad administradora de pensiones, no puede hacer exigibles en cualquier tiempo, todos aquellos aportes que el empleador debió haber cotizado por efecto de las vinculaciones contractuales del afiliado durante toda su vida laboral, pues de aceptarse que la acción de cobro que debe adelantar la AFP frente al empleador moroso de los aportes al sistema general de pensiones, es de carácter imprescriptible, se desconocería la finalidad de las diferentes facultades de fiscalización, de control, acciones precoactivas y coactivas, otorgadas por el legislador a dichas entidades, a efectos de hacer efectivo el pago de los aportes por parte del patrono renuente. (...)"

Expuesto lo anterior, la conclusión general que emerge de lo discurrido hasta aquí, es que la concepción firme y estructurada desde el precedente de las Altas Cortes citadas, contrario a lo sostenido por el recurrente, apunta a que la **prescriptibilidad de la acción de cobro de aportes a cargo de las AFP** es de **cinco (5) años**. Y es que el apelante, en la sustentación de su recurso hace alusión a la imprescriptibilidad de los aportes, lo que es cierto tal como se ha expresado a lo largo de esta providencia, pues en modo alguno la prescripción de la acción de cobro afecta a aquellos trabajadores afiliados por cuenta de quienes PROTECCIÓN S.A. pretendió con este proceso el pago de aportes a pensión: Es imperativo distinguir, de un lado, la acción del trabajador que persigue judicialmente a su empleador para recuperar los aportes pensionales necesarios en la construcción de su derecho pensional, y de otro, la acción de cobro adelantada por las entidades de previsión social:

- En el primer caso, los aportes pensionales son imprescriptibles y puede el afiliado demandar en cualquier tiempo en tanto propende por la consolidación de su derecho imprescriptible a la pensión, sin que medie en dicha situación una omisión que sea atribuible a la Administradora de Pensiones, por lo que no se pueden hacer recaer en esta los efectos de tal acción (**SL808-2022, SL2722-2022 y SL061-2023**, entre muchas otras).
- Contrario a lo que acontece cuando es la AFP la que actúa de modo negligente en el cobro de tales aportes, caso en el que sí recae en su cabeza las consecuencias de su actuar.

En el segundo escenario, que es el asunto bajo estudio, cuando la reclamante por el pago de aportes adeudados por un empleador moroso lo es la administradora de pensiones, quien pudiendo acudir a los mecanismos legales que se establecen para obtener cumplidamente el pago de tales recursos deja

transcurrir los términos procediendo tardíamente con las acciones de cobro, es en este evento que sí operan las reglas de extinción derivadas de la prescripción.

Ello por cuanto no puede la entidad que presta el servicio público de la seguridad social abstenerse de manera indefinida de cumplir con el ejercicio de las acciones de cobro en contra del empleador moroso, y al cabo de los años, pretender llevar a efecto tales acciones con el único fin de evitar quedar incurso en el allanamiento de la mora que le impone el reconocimiento de las semanas frente a las cuales no se dio la cotización por deuda patronal, por la omisión, aquí sí imputable a ella misma, de acudir oportunamente al cobro de esos aportes.

De ese modo, debe atenderse el compendio tributario para efectos de proceder con el cobro de aportes adeudados, cuyo límite temporal debe contarse a partir de la fecha en que los aportes patrono - laborales se hicieron legalmente exigibles.

Pues bien, bajo las anteriores premisas se analiza en el caso concreto la situación, debiéndose destacar que el recurrente **en manera alguna cuestiona el principal argumento de la decisión referido al incumplimiento del término consagrado en el artículo 94 del Código General de Proceso**; encontrándose en todo caso acreditada la prosperidad de la excepción por lo siguiente:

Los periodos en mora que pretenden ser cobrados corresponden al período 2005 al abril de 2013⁴: De conformidad con lo establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario, el término de 5 años vence el **30 de abril de 2018**, respecto al aporte más reciente.

La demanda se presentó el **5 de diciembre de 2013**⁵ y el auto que libró mandamiento de pago es del **25 de agosto de 2016**, que fue corregido por auto que se notificó por estados del **29 de septiembre de 2016**⁶.

Ahora, el artículo 94 del CGP en el inciso primero indica:

⁴ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 51 A 61

⁵ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 63

⁶ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 119 y 126

“ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. (...)”

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido de manera enfática y reiterada en su jurisprudencia que la aplicación de esta regla no procede de manera automática, atendiendo al espíritu tuitivo del derecho del trabajo y a la naturaleza tan particular de los conflictos que se ventilan ante nuestra jurisdicción. Ha enfatizado que en eventos en los que la tardanza suceda por **negligencia del juzgado** o por **actividad elusiva del demandado**, mal harían los jueces en concluir que el término de prescripción no se interrumpió con la presentación de la demanda, “(...) *porque repugna al ordenamiento jurídico que el actor que obra con rectitud y satisface las cargas procesales que sobre él pesan, sin embargo, tenga que soportar consecuencias jurídicas desfavorables por conductas reprochables a la incuria de funcionarios judiciales o a maniobras de la parte contraria, que, posteriormente, resultase beneficiada de su propia conducta contraria a derecho*”. Es esta la interpretación conforme a la Carta Política (**artículo 4º de la CP de 1991**) y al principio de **lealtad procesal** que incumbe a las partes (**artículo 49 del CPTSS**).

Así se ha sostenido de manera reiterada y pacífica, en providencias como las del **12 de febrero de 2004 con Rad. 21062, SL8716-2014, SL 3693-2017, SL2532-2018, SL423-2019** y recientemente en sentencia **SL3788-2020 del 30 de septiembre**:

“Ciertamente, como lo dice la censura, los efectos de la interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda que prevé el art. 90 del CPC (cuya aplicación al procedimiento laboral es aceptada por la jurisprudencia laboral vigente, verbigracia sentencias CSJ SL 3693-2017 y SL2532-2018) están condicionados a que la notificación al demandado del auto admisorio se efectúe dentro del año siguiente a la notificación de ese auto a la parte actora.

No obstante, la jurisprudencia laboral también tiene establecido que la condición consistente en realizar la notificación al demandado dentro del plazo concedido por el legislador **no se aplica literalmente, de forma automática, es decir, con el simple conteo de términos**, pues, de acuerdo con el principio de interpretación conforme que ha de orientar en todo caso la interpretación de la ley según el **art. 4 de la Constitución**, el **juzgador debe evaluar si la tardanza en la notificación obedeció a la conducta negligente del actor o si, por el contrario, tuvo que ver con el proceder del despacho judicial o el de la demandada.**

En este sentido, se adopta en sede de casación el criterio de la Sala que impregnó la decisión de instancia de la sentencia CSJ SL 4578-2014, donde, a pesar de que el auto

admisorio de la demanda fue notificado luego de transcurrido más de los 120 días de que trataba el artículo 90 del CPC (esto fue antes de la modificación introducida por el art. 10 de la Ley 794 de 2003), la Corte tomó la fecha de la presentación de la demanda para dar por interrumpida la prescripción, **porque tuvo en cuenta que la tardanza en la notificación no fue por culpa del demandante, en la medida en que, ante la renuencia del demandado a comparecer, el juez debió impulsar oficiosamente el proceso**, art. 48 del CPT y SS, mediante el nombramiento de curador y hacer, a través de este, la notificación correspondiente, sin que fuera necesaria la petición de parte, ya que no fue el caso de que la dirección de la contraparte indicada en la demanda no existiera, en tanto que, por el contrario, el informe del citador indicaba que sí existía; además que el actor había cumplido con su carga de aportar todos los medios necesarios para que se diera la respectiva notificación". (Negritas y subrayas intencionales)

En conclusión, debe destacarse que para verificar si en efecto se interrumpió o no el término de prescripción con la presentación de la demanda, debe analizarse a qué sujeto es imputable la demora en la notificación del auto admisorio. Si la demora sucede por negligencia de la parte actora, entonces el término de prescripción únicamente se interrumpirá **una vez se notifique a la parte demandada**; pero si la tardanza se debe a negligencias del Despacho o a la actividad elusiva del demandado, el término prescriptivo se interrumpirá con la presentación de la demanda.

Pues bien, a partir del auto que se notificó por estados el **29 de septiembre de 2016**⁷ encontramos las siguientes actuaciones de la ejecutante:

- 21 de octubre de 2016, solicitó reconocimiento de dependiente judicial⁸.
- 9 de noviembre de 2016 solicitud de medida cautelar⁹.
- 15 de noviembre de 2016 se decreta embargo¹⁰.
- 06 de septiembre de 2017 se requiere a Bancolombia¹¹.
- 7 de septiembre de 2017 la juez requiere y ordena oficiar¹².
- 11 de septiembre de 2017 se solicita reconocimiento dependiente judicial¹³.
- 23 de octubre de 2017 devolución citación notificación personal¹⁴.
- 11 de diciembre de 2017 solicitud oficiar al Banco de Bogotá¹⁵.
- 15 de mayo de 2018 constancia de entrega de embargo¹⁶.

⁷ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 119 y 126

⁸ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 127

⁹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 133

¹⁰ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 135

¹¹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 143

¹² CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 145

¹³ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 149

¹⁴ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 161

¹⁵ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 173

¹⁶ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01- PAGINA 177

Se ha señalado que el término de 5 años vence el **30 de abril de 2018** y se verifica que para **mayo del año 2018 este había fenecido** sin que la parte ejecutante hubiese notificado el auto que libró mandamiento de pago, ni antes de ese momento **ni dentro del año siguiente a la notificación por estados** del auto que libró mandamiento de pago. Inclusive, se advierte que solo solicitó el emplazamiento del ejecutado el **22 de octubre de 2020**¹⁷.

Revisadas las actuaciones, no se encuentra que la tardanza en la diligencia de notificación sea atribuible al Despacho de primera instancia, luego luce evidente el transcurso del lapso quinquenal que da lugar a que la acción de cobro se halle prescrita. Siendo lo anterior así, sobran consideraciones para concluir que se confirmará la decisión de primera instancia

En concordancia con el #4 del artículo 365 del C.G.P costas en ambas instancias a cargo de Protección S.A. En esta sede se fijan en 1/2 SMLMV.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión tomada el 16 de noviembre de 2023 por medio de la que se declaró probada la excepción de prescripción.

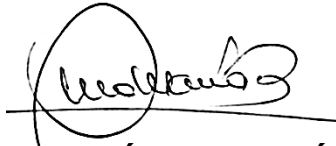
SEGUNDO: Costas a cargo del ejecutante. Agencias en derecho ½ SMMLV.

Lo anterior se notifica por ESTADOS.

¹⁷ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 02

RADICADO 050013105 - 006 2013 01742 01

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDON



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 218 del 19 de diciembre de
2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>